

LUCES Y SOMBRAS DE LA LAICIDAD “A LA FRANCESA”

Fernando Rey Martínez*

En el inacabable y apasionado debate que en gran parte de los ordenamientos del mundo se verifica sobre el significado del principio de laicidad, el modelo francés es alabado o reprobado con idéntica intensidad. A nadie parece dejar indiferente. Así que es indudable el interés de analizar en profundidad el principio francés de laicidad y de compararlo con otros modelos de relaciones entre el Estado y las confesiones. Lo haré, además, a partir del magnífico banco de pruebas que está siendo el problema del pañuelo islámico en las escuelas públicas.

El principio de laicidad francés aparece unido a una concepción unitaria de la Nación francesa y, por tanto, a su indivisibilidad, frente a cualquier forma de afirmación de pertenencia a comunidades religiosas. Pero su sentido original, en la Ley de separación de Iglesias y Estado de 1.905, que buscaba sobre todo organizar de una nueva manera las relaciones entre la esfera estatal y la Iglesia Católica, ha experimentado una brusca transformación en su aplicación a la religión islámica, a partir de las oleadas emigratorias de las últimas décadas con destino a Francia de miles de musulmanes, sobre todo de las antiguas colonias africanas. Las relaciones del Estado francés con la comunidad musulmana presentan perfiles específicos. Por ejemplo, a diferencia de la católica, la confesión islámica ha carecido tradicionalmente de representación jurídica propia (entre otras razones por sus diversas tendencias y orígenes nacionales), de modo que el diálogo ha sido más difícil. Por otro lado, aunque se trata de encontrar un lugar para el ejercicio de la religión musulmana, no se desea hacerlo, al menos por los partidarios de un entendimiento fuerte del principio de laicidad, al precio de abrir un espacio para la creación de una comunidad cultural y cultural propia y separada del resto, como una especie de gueto.

Este contexto explica por qué el *affair des foulards* se ha convertido en un problema social y constitucional central en Francia. Es un problema que se desarrolla, además, en el lugar más simbólico del orden republicano (y precisamente allí donde históricamente empezó a acuñarse el principio de laicidad): la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria para todos. Por supuesto, no es ajeno al debate el ambiente internacional de desconfianza hacia el Islam generado por los

*Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Valladolid – rey@der.uva.es

ataques terroristas contra Nueva York, Madrid y Londres, etc, ni tampoco el ascenso al poder en Francia de la derecha neo-gaullista, que se siente depositaria de los ideales republicanos de la Nación francesa

En su origen, la laicidad fue un principio político de reacción contra el papel central que jugaba la Iglesia Católica en la sociedad francesa del Antiguo Régimen. Fue una auténtica “irreligión de Estado”. La *Révolution* intentó que la religión pasara a un segundo plano, convirtiendo la fe laica emergente en la nueva moral republicana. Para Danton, por ejemplo, “los niños pertenecen a la República más que a sus padres”, siendo “en las escuelas nacionales donde los niños deben mamar la leche republicana”. Pero el principio de laicidad de la Tercera República, el de la Ley de separación de 1.905, es más neutro en su relación con el hecho religioso porque se propone, sobre todo, que el Estado se abstenga de favorecer cualquier religión o incluso de ocuparse él mismo de la religión. Es una suerte de “neutralidad pasiva”, que, a diferencia del espíritu republicano de 1.789, no niega el fenómeno religioso (al que implícitamente reconoce) ni intenta dominarle. Finalmente, el principio de laicidad va a experimentar a lo largo del siglo una transformación en sentido “positivo”, que “implica el compromiso del Estado de... asegurar a cada uno el libre ejercicio de su religión, esto es, de poner a su disposición, si la necesidad lo impone, de los medios para permitirle observar las reglas”. Aunque el principio de laicidad tiene, pues, profundas raíces en la historia (ya desde 1.789), su consagración constitucional es relativamente tardía, el Preámbulo de la Constitución de 1.946, vigente actualmente en virtud del Preámbulo de la Constitución de 4 de octubre de 1.958, que define a Francia como una “República... laica” (disposición que, por cierto, ha pasado al actual art. 1 de la Constitución en vigor).

La laicidad no es absoluta, sin embargo, ni siquiera en Francia porque el día de descanso semanal es el domingo y la mayoría de las fiestas se corresponden con la tradición cristiana; la Ley de 1.905 admite el pago público de capellanes en establecimientos públicos, colegios, liceos, prisiones, hospitales, etc. a fin de permitir el libre ejercicio de culto; por otro lado, así como las mezquitas musulmanas son lugares de culto integralmente privados, de modo que, por ejemplo, se prohíbe el uso de altavoces para llamar a la oración salvo autorización, los edificios de culto cristiano disponen de una reglamentación específica que permite el sonido de las campanas (aunque no se reserva sólo para uso religioso, sino cívico por ser de dominio público: el art. 27 de la Ley de 1.905 confiere una competencia de derecho común a los alcaldes para hacer sonar las campanas en interés del orden y la seguridad públicas). Otro ejemplo se refiere a los lugares de culto en cuanto tales. La Ley de 1.905 (art. 13) incorporó al dominio público todos los lugares de culto en ese momento (no a los erigidos con posterioridad a la Ley, que son de derecho privado), aunque el Consejo de Estado ha sostenido que ello no entraña la necesaria afectación de los edificios al uso directo del público. Pues bien, este régimen de dominio público, en contra de lo que pudiera superficialmente pensarse, presenta innegables ventajas, la principal es que el

mantenimiento y la conservación del edificio corresponden al ente público propietario. Esto no ocurre en ningún caso con las mezquitas. Otra excepción de la laicidad es que se permite a algunas asociaciones de culto (reconocidas como tal por la autoridad pública) recibir donaciones y herencias (las religiones tradicionales), pero se suele negar a grupos religiosos minoritarios, como los Testigos de Jehová, por la percepción de que este tipo de movimiento es de naturaleza sectaria y potencialmente peligrosa para el orden público. Se ha dicho que la Ley sobre desarrollo del mecenazgo de 23 de julio de 1.987 supone el fin de la fiscalidad laica porque permite a las principales confesiones, si obtienen el estatuto de “asociación de asistencia o beneficencia” (por actividades de carácter caritativo, asistencia educativa y cultural, cooperación misionera, etc.), conseguir importantes ventajas (recibir legados, donaciones, etc. deducibles fiscalmente para el contribuyente). Por no hablar del régimen concordatario en Alsacia-Mosela, donde se prevé la presencia obligatoria en la escuela pública de cursos de enseñanza religiosa de cuatro cultos reconocidos (católico, luterano, reformado, judío), aunque el alumno puede elegir, previa dispensa, un curso de enseñanza moral; los obispos católicos son nombrados por decreto del Presidente de la República, previa consulta con la Santa Sede, y también las principales autoridades de la Iglesia luterana; los ministros de los principales cultos son remunerados directamente por el Estado; y la mayoría de la población ve con buenos ojos este sistema, de modo que se ha abandonado la hipótesis de una eventual abrogación.

El conflicto ideológico en Francia transita entre los *pluralistas*, los grupos sociales y religiosos que reivindican la propia diversidad, que incluye hacer visible en el espacio público las diferencias étnicas, culturales y religiosas y los *monistas*, que siguen evocando el principio de laicidad como fundamento de la tradición republicana y factor de unidad del país en torno al principio de igualdad y de autonomía del individuo contra la influencia de las religiones en la esfera pública. La polémica viene de lejos, de finales de los años ochenta del siglo pasado, y el episodio del pañuelo islámico en las escuelas públicas es tan sólo un punto de fricción más, por cierto no muy afortunado. Se enmarca, además, claramente, en el grave problema de la difícil integración de la creciente inmigración de ciudadanos de países de tradición musulmana en la sociedad francesa.

Un documento especialmente valioso en esta materia es el Informe Stasi, que es el resultado del trabajo de una comisión de expertos sobre la aplicación del principio de laicidad nombrada por el Presidente Chirac el 3 de julio de 2.003. La Comisión, presidida por Bernard Stasi, ex Ministro de Estado e integrada por eminentes juristas y funcionarios, rindió su Informe al Presidente el 11 de diciembre de ese mismo año. Esta Comisión trabajó en paralelo con la *misión d'information* de la Asamblea nacional sobre “la cuestión del uso de signos religiosos en la escuela”, *Misión Debré*, que entregó su Informe el 4 de diciembre de 2.003 proponiendo que “se dictara una disposición legislativa que prohibiese expresamente el uso visible de todo signo religioso y político en el interior de los institutos”. El Informe Stasi tuvo un objeto más amplio, no se limitó a la presencia de signos religiosos en la

escuela pública (en este punto coincidió con el Informe Debré proponiendo la adopción de una ley que prohibiese en las escuelas públicas las vestimentas y signos que manifestaran una pertenencia religiosa o política, sugiriendo la distinción entre signos *ostensibles*, prohibidos, y signos *discrets*, lícitos).

El Informe Stasi tiene cuatro partes, precedidas de una breve introducción en la que se define lapidariamente la laicidad: “La laicidad, piedra angular del pacto republicano, reposa sobre tres valores indisociables: libertad de conciencia, igualdad jurídica de las opciones religiosas y espirituales, neutralidad del poder político. La libertad de conciencia permite a cualquier ciudadano elegir su vida espiritual o religiosa. La igualdad jurídica prohíbe toda discriminación o restricción y el Estado no privilegia ninguna opción. El poder político reconoce sus límites absteniéndose de toda interferencia en el orden espiritual o religioso. La laicidad traduce de este modo una concepción del bien común. Para que todo ciudadano pueda reconocerse en la República, ésta sustrae al poder político de la influencia dominante de cualquier opción espiritual o religiosa, a fin de poder vivir juntos”. Esta definición representa la clave de bóveda de todo el Informe.

La tesis que distingue la presencia *social* –legítima- de las confesiones y la presencia *política* –ilegítima- me parece discutible y no sólo porque me parece difícil distinguir con castidad metodológica lo “social” y lo “político”, sino, sobre todo, porque introduce una limitación, un tanto confusa, por cierto, (lo que aumentará la discrecionalidad del órgano público llamado a dirimir un eventual conflicto) en la dimensión pública y colectiva de la libertad religiosa. No veo por qué un Estado democrático debe prohibir los intentos de las confesiones religiosas o de cualquier otra asociación de influir en la vida política para que las instituciones representativas adopten sus puntos de vista, con el único límite del Código Penal y del respeto a las reglas del juego democrático. Otra cosa es que tengan o no éxito, según lo determine en cada momento el proceso político.

Más aún, creo que levantar barreras a la expresión política de las confesiones debilita la idea pluralista que está en la entraña del principio democrático. Y además, me parece que esta tesis se apoya sobre una idea discutible y otra contradictoria. El presupuesto que no comparto es la idolatría hacia un Estado que se presume ideológicamente puro, pero que no lo es, y al que se da primacía sobre la sociedad (como si fuera una especie de fantasma cuyo cuerpo, bastante leve por lo demás, fueran los principios republicanos y no el conjunto de ciudadanos). El argumento contradictorio consiste en que, de un lado, la laicidad postula que el Estado es incompetente para valorar lo religioso en ningún sentido, pero, de otro lado, guillotina un contenido central de algunas confesiones, desde luego las cristianas, como es la dimensión política de la fe. El Estado selecciona de este modo la parte del credo que ampara la libertad religiosa que concede y la parte que no. El Informe afirma que el Estado se beneficia de la separación con las confesiones porque “se libra del ataque confesional y pertenece a todos los ciudadanos”. No sé qué ataque será ese; pero es expresivo el lenguaje militar utilizado (quizás el laicismo no haya dejado de ser nunca un laicismo de comba-

te). Y en cualquier caso, entendida así la laicidad, el Estado pertenecerá a todos los ciudadanos... menos a los creyentes, que no podrán ser a la vez ciudadanos y creyentes de modo pleno. Y llega a afirmar el Informe que la separación también beneficia a las confesiones porque así “se concentran en su misión espiritual”, como si lo espiritual no tuviera que ver con las realidades terrenas. Pese a los piadosos deseos en contrario, surge un Estado-teólogo en el Informe.

El Informe Stasi se muestra muy preocupado por el hecho de que los fundamentos del pacto republicano se vean amenazados por un “replegamiento comunitario”, más rápido que deseado, en el interior de los barrios marginales, que amenaza también la libertad individual y la prohibición de discriminación sexual y étnica. Crece una dinámica de gueto (también en las escuelas públicas de la zona; los alumnos de clase media y alta huyen a colegios privados). En ese contexto, grupos político-religiosos explotan el malestar social para movilizar a los militantes. Y presionan a los jóvenes, especialmente a las muchachas, para que cumplan estrictamente las normas religiosas. Las jóvenes son víctimas de un renacimiento del sexismo que se traduce en violencia verbal, psicológica o física. Se las obliga a vestirse con trajes largos y asexuados, a bajar la vista ante un hombre, o, en caso contrario, se las trata de “putas”. Algunas mujeres llevan voluntariamente el velo, pero otras lo hacen bajo presión. Si llevan el velo, no serán maltratadas. El velo ofrece de este modo, paradójicamente, aquella protección que debería garantizar la República. Las chicas son víctimas de otras formas de violencia: mutilaciones sexuales, poligamia, repudio, matrimonios impuestos (que suele suponer la pérdida de la escolaridad). Derechos elementales de las mujeres son cotidianamente violados en Francia. La situación es inaceptable, como lo es también el hecho de que crece el odio hacia el Islam (sin distinguir las posturas fundamentalistas del resto) y también hacia los judíos.

El panorama así descrito por el Informe es catastrófico (tiene tintes casi bélicos: se llega hablar de “guerra contra la laicidad”) y sirve para explicar las razones de la ofensiva laicista que propone el texto en su siguiente capítulo. Sin duda, los problemas identificados son graves y requieren una respuesta estatal adecuada. La cuestión es si medidas como la prohibición del pañuelo islámico apuntan o no en la dirección correcta. No se discute el “qué”, sino el “cómo”. Porque el problema de verdad no es tanto el de las relaciones entre el Estado y las confesiones en general, como otro más específico (porque, aunque el Informe Stasi intenta eludirlo explícitamente, ofreciendo la sensación de que sus observaciones incluyen a todos los cultos, la realidad es que afecta fundamentalmente a la minoría islámica) y a la vez más amplio, porque se refiere no sólo a un problema religioso, sino social, político, económico y cultural: la integración de la creciente inmigración de origen musulmán en Francia. *That's the point*. Medidas como la prohibición del *hijab* puede que estén intentando atajar alguna manifestación de la *enfermedad*, pero, desde luego, no impactan terapéuticamente sobre sus causas profundas.

Al revés. Es posible que sirvan para aumentar la fractura social. La lógica puramente prohibicionista (que es absolutamente necesaria en algunos casos:

mutilaciones sexuales, repudio, violencia de todo tipo, etc.) sólo sirve, si no se acompaña de otras medidas de impacto sobre el orden social, cultural y simbólico, para alimentar el círculo de acción/reacción del profundo problema de una sociedad multiétnica en la que se presentan importantes dificultades de integración de la minoría religiosa musulmana (que ya no es tan “minoría” porque es la segunda religión en número de miembros en Francia). En este sentido, algunas posibilidades de adaptación de la modalidad de prestación de algunos servicios públicos por respeto a algunas prácticas religiosas (oración cotidiana o del viernes, fiestas religiosas, ayuno del Ramadán, prescripciones alimentarias, ritos funerarios, etc.), siempre que no pusieran en peligro la normal prestación del servicio podrían favorecer, más que perjudicar, la integración de los musulmanes en el tejido social francés.

Lo mismo ocurre con la tolerancia de algunas manifestaciones simbólicas o externas de la propia cultura, como el pañuelo islámico, que debiera verse, creo, si se lleva voluntariamente, como una manifestación de la libertad personal (libertad de expresión, derecho de propia imagen, etc.) y de libertad religiosa en particular. Muchos de los musulmanes que viven en Francia son ya franceses. Francia no puede ignorar por completo sus deseos y prácticas religiosas (tampoco en el caso de que sólo fueran inmigrantes, pero obviamente menos aún si se trata de ciudadanos). Al hacerlo así, puede que esté utilizando el principio de laicidad en este caso como una llave, de clara fabricación cristiana además (a cuya horma se ha fraguado en gran medida la cultura y las tradiciones galas), para cerrar la puerta de la integración en la sociedad francesa a los musulmanes. La laicidad entendida así no es una fórmula de integración del “otro”, sino de simple y pura asimilación. Quizás el principio de laicidad fuera en 1.905 tan sólo un arma defensiva contra la Iglesia Católica y cien años después lo sea contra el Islam.

Otro punto central de la prohibición del *hijab* tiene que ver con la prohibición de discriminación sexual. La laicidad se convertiría, en el caso del pañuelo islámico, en garantía de la amenazada igualdad de las mujeres musulmanas. Creo que los ataques a la igualdad de las mujeres son particularmente intolerables, pero no está claro que llevar pañuelo se perciba necesariamente por quienes lo llevan como un signo de inferioridad femenina. De hecho, dentro del mundo islámico no tiene el mismo significado, depende de cada corriente religiosa, tradición y país. Además, puede también entenderse como un signo tradicional de identidad cultural/religiosa/étnica (bastante común, por otro lado, entre las mujeres de toda la cuenca mediterránea en otros tiempos). En todo caso, el *hijab* no es el velo que cubre todo o la mayor parte del rostro y del cuerpo, sino un pañuelo que “sólo” tapa la cabeza y por ello supone precisamente un avance secularizador respecto del velo.

Particularmente, confieso que a pesar de estos argumentos, que reconocen algún peso, el pañuelo es una prenda cuyo significado (ya sea religioso, ya tradicional) me resulta antipático porque tiene el inequívoco aroma de la discriminación sexual. Tapar el pelo es, se mire como se mire, tapar la feminidad

en el espacio público, reforzando así los estereotipos patriarcales. Otra cosa es que su prohibición sea una medida razonable y efectiva. En primer lugar porque muchas mujeres musulmanas, sin duda la mayoría, desean llevarlo (no todas lo portan por presión ambiental). La prohibición se convierte así en una medida paternalista (se las protege de sí mismas) contraria a la libertad de elección de muchas mujeres (aunque la mayoría sean menores de edad, tienen también ese derecho de elección). En segundo lugar porque, por las razones apuntadas antes, llevar pañuelo no supone necesariamente un ataque intenso a la dignidad femenina. No es el velo, intolerable por completo. Y mucho menos equivale a otras formas de agresión más severas como la ablación del clitoris, el matrimonio a la fuerza, etc. En todo caso, las mujeres en Francia pueden, si así lo desean y cuando lo deseen, solicitar y obtener de las autoridades públicas protección de su voluntad de no llevarlo o de dejar de hacerlo. En tercer lugar, porque la mejor medida para lograr la igualdad no es, según creo, una prohibición pura y dura (que, al revés, puede ser percibida por las propias mujeres no como una protección, sino como una intromisión arbitraria estatal en su autonomía personal), sino una medida de mayor duración: una educación que propicie el paulatino convencimiento de las interesadas (y de los miembros masculinos de su culto) en el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres.

No se trata, creo, de echar a las alumnas de las escuelas públicas por llevar el pañuelo, sino, al contrario, de ofrecerlas más escuela para que algún día, por sí mismas, puedan liberarse de las inercias, tradiciones y prácticas sexistas, también en su vestuario, pero no sólo (porque si únicamente se incide sobre la forma de vestir y no sobre las causas de por qué visten así, de nuevo se estará actuando contra la manifestación del problema pero no contra el problema en sí). La escuela es un lugar de aprendizaje de la democracia. Quizás ésta se robustezca no tanto ocultando las propias convicciones, como mostrándolas, e intercambiando un diálogo fecundo a partir de ellas (aunque sea un camino menos sencillo que si el Estado establece directamente qué hay que creer o no en los espacios públicos, qué signos llevar o no, etc.).

El propio Informe, en su capítulo cuarto, expone algunas posibles objeciones, de efecto búmeran, a la prohibición del *hijab*: estigmatización de los musulmanes, exasperación del sentimiento anti-religioso, imagen internacional de Francia como “liberticida”, fomento del absentismo escolar y del desarrollo de escuelas confesionales musulmanas, dificultades prácticas de aplicación de una ley así, revocación de la doctrina (más sensata y equilibrada) del Consejo de Estado. Pese a todo ello, el texto ha preferido conceder mayor valor a otros argumentos, como los deseos manifestados en el sentido de la prohibición de los profesores y directores de los centros educativos y el intento de proteger a las chicas musulmanas procedentes de la emigración (“mayoría silenciosa”) presionadas por su familia y el degradado ambiente de sus barrios.

La idea de una ley que introdujera la prohibición escolar de llevar signos religiosos se impulsa con motivo del Informe Stasi y la respuesta positiva del

Presidente Chirac a la propuesta que en este sentido contenía dicho Informe. El tiempo de discusión parlamentaria fue breve: se aprobó el 3 de marzo de 2.004, fue promulgada por el Presidente Chirac el 15 de ese mismo mes y publicada en el *Journal Officiel* el 17. La Ley que disciplina, en aplicación del principio de laicidad, el uso de signos y vestuario que manifiesten una pertenencia religiosa en las escuelas, colegios e institutos públicos entró en vigor al comienzo de este año escolar 2.004/2.005.

El contenido de esta Ley es la adición en el Código de la educación de un apartado nuevo al artículo 141-5, el apartado 141-5-1, con esta formulación: “En las escuelas, en los colegios y liceos públicos, el uso de signos o vestuario mediante los cuales los alumnos manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa está prohibido. El reglamento interno preverá que la incoación de un procedimiento disciplinario sea precedido de un diálogo con el alumno”.

Objeto de la prohibición no son ya “comportamientos”, sobre los que la jurisprudencia anterior dejaba un margen de apreciación a los directores de los Centros caso por caso, sino el uso de signos y vestuario religioso *ostensible*. No parece acertada la elección de la palabra *ostensible*, porque el *Petit Robert* la define como “aquello que puede ser mostrado públicamente sin inconveniente.

La Ley no se aplica a los colegios y liceos privados, dado que su “carácter propio” permite a las convicciones religiosas expresarse más libremente. Tampoco se aplica a las Universidades (públicas o privadas). En cuanto a su ámbito territorial, no se aplica en los tres departamentos de Alsacia/Mosela, ni en la Guayana, ni en la enseñanza primaria de Nueva Caledonia (que tiene un régimen de soberanía compartida con Francia), ni en *Wallis-et-Futuna*, donde la instrucción pública es objeto de una concesión del Estado a una misión católica, la de los padres de Santa María (que son remunerados por el Estado), ni en la Polinesia francesa.

El 18 de mayo de 2.004 el Ministerio de Educación nacional, enseñanza superior e investigación dictó la Circular de 18 de mayo de 2.004 para concretar la Ley n. 2004-228 en análisis. Esta Circular concreta como signos religiosos ostensibles “el velo islámico, cualquiera que sea el nombre que se le dé, la kippá judía y las cruces de dimensiones manifiestamente excesivas”. Pero el concepto puede aplicarse también a signos de otras religiones u otros signos de las religiones mencionadas. En ningún caso los alumnos pueden negarse a seguir las reglas escolares sobre vestuario por motivos religiosos. La Ley se aplica a todas las actividades que sean responsabilidad de los centros públicos, aunque se realicen fuera de sus instalaciones, como, por ejemplo, excursiones escolares, clases de educación física, etc. Dado su estricto deber de neutralidad, la Circular prohíbe a todos los agentes del servicio público de educación (por tanto, no sólo a los profesores) llevar cualquier tipo de signo religioso, ya sea ostensible ya discreto. Tales agentes deben abstenerse de todo comportamiento que pueda ser interpretado como un signo de adhesión o de crítica a una creencia particular. La Ley no se aplica, sin embargo, a los padres ni a los candidatos a entrar en el instituto. Los alumnos no pueden oponerse a una enseñanza (porque la imparta una mujer,

por ejemplo), y ningún argumento está excluido a priori de la discusión científica y pedagógica. Tampoco pueden oponerse a la obligación de hacer un examen, ni a su modalidad. Se les puede conceder permisos de ausencia con motivo de sus grandes fiestas religiosas que no coincidan con un día de vacaciones (y no se les podrá examinar ese día).

En cuanto al procedimiento de diálogo que prevé la Ley, la Circular concreta que no se trata de una negociación que sirva para una derogación singular de la Ley, sino que su objetivo es convencer a los alumnos y a sus padres de la importancia del respeto al principio de laicidad, que no supone una renuncia a sus convicciones. Debe conducir el diálogo el director del Centro, apoyado por los profesores que conozcan al alumno en cuestión. Durante el diálogo, el director debe vigilar las condiciones de inserción del alumno en la actividad escolar. El diálogo debe ser una ocasión para una reflexión común (con el alumno y su familia) sobre las consecuencias de su comportamiento y para ayudar al alumno a construir su proyecto personal. Los agentes escolares no deben opinar sobre las convicciones y prácticas religiosas de sus alumnos. Si el diálogo no tiene éxito, y el consejo de disciplina asumiera una decisión de expulsión, la autoridad académica examinará con el alumno y sus padres las condiciones bajo las cuales podrá proseguir su carrera escolar. La Circular invita a los Centros a incluir en sus reglamentos internos la nueva regla y la concreción del procedimiento de diálogo ó sanción.

Esta Ley plantea, sin embargo, no pocos problemas, por ejemplo, de compatibilidad con la libertad de manifestar públicamente las propias convicciones. La justificación del límite al ejercicio de la libertad religiosa que introduce la Ley precisamente en el aseguramiento de la libertad de las muchachas musulmanas (que en muchos casos se ven forzadas a llevar el pañuelo) no sirve, sino todo lo contrario, en relación con las chicas que libre y voluntariamente sí desean llevarlo. Además, los casos de presión para llevar un signo o una indumentaria religiosa descritos sólo se refieren al *hijab* musulmán, mientras que la Ley se refiere a todo signo religioso, sin distinciones. En estos casos (símbolos religiosos no musulmanes) la limitación legal está aún menos justificada.

Presenta también una notable ambigüedad la interpretación de la palabra central de la nueva regulación: "ostensibles". Se permiten los signos religiosos discretos, pero no los ostensibles (remitiéndose la valoración discrecional de cuándo estamos en presencia de unos u otros a las direcciones de los propios Centros). El Consejo de Estado exigía con sensato criterio, antes de la Ley, que los signos fueran proselitistas o provocadores. Ahora no es necesario. Sin embargo, un signo discreto quizás pueda manifestar la pertenencia a una determinada religión igual que uno ostensible. Parece claro que el legislador perseguía únicamente prohibir el pañuelo islámico y en todos los demás casos la regulación no se ajusta demasiado bien a la finalidad que pretende.

En efecto, también a la luz de la igualdad la Ley suscita algunas perplejidades. Las alumnas que llevan voluntariamente el pañuelo islámico no se encuen-

tran en la misma situación que las que lo llevan obligadas, por lo que la regulación jurídica es *over-inclusive*. Pero el punto crítico aquí es la discriminación por motivos religiosos, sobre todo en contra del Islam. Cualquier ideología (no religiosa) sí puede manifestarse. Asoma de nuevo la concepción anti-religiosa del principio de laicidad. La neutralidad ideológica del espacio público parece referirse sólo a las religiones, no a las ideologías. La laicidad francesa diseña un mapa de respetabilidad de las convicciones: las ideológicas lo son más que las religiosas. La limitación legal se refiere sólo a la libertad de los alumnos creyentes, no a la de todos. La Ley discrimina también en el acceso a la escuela pública porque los alumnos que no se plieguen a ella no podrán matricularse. El efecto de esta ley puede ser socialmente divisivo: los alumnos que accedan a la escuela pública se reafirmarán en la laicidad, mientras que los creyentes se refugiarán en las escuelas confesionales. La escuela pública ya no será la escuela de todos. Particularmente, en relación con los niños musulmanes, el riesgo de profundizar y ampliar los guetos, también escolares, se agudiza. Todo ello impacta negativamente sobre el propio principio de laicidad porque el Estado interfiere, no a favor, sino en contra de las religiones frente a cualquier otro planteamiento ideológico y, sobre todo, en contra de la religión islámica. El Estado francés pretende ser neutro, pero no es neutral.

Francia tiene el primado histórico de la laicidad (desde la Ley de 1.905), pero su concepción es absolutamente peculiar, sólo tiene sentido allí. Su relación con el ideal republicano es única. Se trata de una auténtica religión civil. No es de modo alguno exportable. En cualquier caso, la total neutralidad estatal no se ha conseguido ni siquiera en Francia. Aunque deslumbrante a la mirada de un extraño, el modelo de laicidad a la francesa se funda en presupuestos discutibles, como la superioridad del Estado sobre la sociedad. Manifiesta desconfianza hacia los grupos religiosos como potenciales portadores de valores contra-republicanos. La laicidad pone a la dimensión colectiva y pública de la libertad religiosa bajo sospecha (sólo considera dos polos de relación, el individuo y el Estado). Tiene un aliento nacionalista y no liberal (no sorprende que haya sido más defendida por la derecha nacionalista neogaullista que por el planteamiento de izquierdas tradicional, más proclive por lo general a reconocer la diversidad social y el pluralismo político). El intento de evitar que las confesiones tengan una dimensión social y no política sólo tiene sentido en un modelo de democracia de individuos y no de grupos. Significativamente, la Ley de 1.905 garantiza en su art. 1 el libre ejercicio de los “cultos” y omite el empleo de otras palabras que expresaran más incisivamente la dimensión pública y colectiva de la fe, como “confesiones”, “religiones” u otras. La laicidad es una ideología de Estado (por cierto, ¿existe una sola manera de entender los “valores de la República”, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la indivisibilidad, la neutralidad laica?, y, en caso afirmativo, ¿quién la establece con autoridad?). La ideología subyacente en la tesis de la neutralidad ideológica del Estado no es ideológicamente neutral.

Resulta más difícil aún importar a nuestro ordenamiento la solución legal francesa de la prohibición del *hijab*, porque el problema no es sólo religioso, sino que tiene una causa más profunda y muchas otras manifestaciones: la integración social, económica, cultural, política, etc. de los numerosos inmigrantes de origen musulmán en Francia. La regulación francesa es incomprensible aquí porque nosotros no tenemos ese problema (en parte porque no hemos tenido el pasado colonial francés en el mundo musulmán: el fantasma del colonialismo se vuelve de nuevo contra una antigua metrópoli). La prohibición del pañuelo es una solución jacobina, sencilla, general, superficial: es cirugía, no medicina, es un corte limpio del problema, como una guillotina, pero, además de tosca, se trata de una regulación, que presenta bastantes objeciones en relación con los derechos fundamentales (libertad, igualdad e incluso laicidad estatal) y con su eficacia para solucionar los graves problemas de multiculturalidad planteados más allá de los Pirineos. La Ley aparenta ser general (todo signo religioso ostensible), pero es bien singular: se refiere al *hijab* (así se ve claramente en el Informe Stasi: se trata de proteger a las chicas musulmanas de las presiones que reciben para que lo lleven). El legislador francés, aunque aprobara la Ley con una amplia mayoría (en la Asamblea Nacional, 494 votos a favor y 36 en contra sobre un total de 561; en el Senado, 277 votos a favor y 20 en contra sobre un total de 317), tenía dudas sobre el posible efecto negativo de la nueva regulación (como se demuestra en el debate parlamentario) y por eso añadió una disposición, el art. 4, que dispone que las disposiciones de la Ley serían objeto de una evaluación al año de su entrada en vigor.

En definitiva, el principio de laicidad a la francesa, en contra de la opinión de sus numerosos admiradores, podría no ser el futuro modelo hacia el que deberían tender las regulaciones estatales sino, por el contrario, podría ser una suerte de fósil histórico, podría expeler el aroma de la Ley de 1.905 que el año pasado cumplió cien años y que sigue siendo, pese a todo, la clave de bóveda del tan sugerente como discutible sistema francés. Más allá de toda la retórica asociada a la palabra, tal vez la cuestión se reduzca, en apretada síntesis, a que en 1.905 el legislador francés intentara defender el espacio público frente a la Iglesia católica y en 2.004 quiso hacerlo de nuevo, pero esta vez frente a la religión islámica. Tal vez la laicidad *made-in-Francia*, la laicidad a la defensiva o rompe-olas, sea un producto histórico/ideológico de imposible y no deseable importación para otros ordenamientos jurídicos. Tal vez siga siendo una rara y fascinante excepción.